

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Inés Arrimadas García y Marcos de Quinto Romero, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el boicot promovido por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) contra productos de empresas catalanas que no apoyan los objetivos del separatismo nacionalista catalán.**

Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) inició recientemente una nueva fase del proyecto "*Consum Estratègic*", un proyecto dirigido a boicotear, aislar y amedrentar a las empresas catalanas que no apoyan de manera explícita los objetivos del separatismo catalán.

Este proyecto, que se puso en marcha de un buscador de empresas comprometidas con la causa separatista, continúa ahora con el explícito -e infame- llamamiento de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, a que los consumidores cambien de proveedores a aquéllos afines con la causa separatista, en todos los posibles ámbitos de consumo, con especial incidencia en el consumo de electricidad, gas, telefonía, carburantes, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies e incluso representación sindical y patronal.

Esta campaña se enmarca dentro de las acciones que desde hace tiempo viene promoviendo la ANC para promover herramientas informáticas con el objetivo declarado de "*poner de acuerdo empresas con el público consumidor republicano*", con el fin de dar lugar a un "*mercado republicano que se convierta en una fuente de financiación para la república catalana, mientras ésta no sea efectiva*". Siendo este comportamiento de por sí preocupante, en esta ocasión resulta de especial gravedad dado que se trata de una acción que busca forzar a las empresas catalanas a significarse políticamente de manera pública y en contra de su voluntad, con la finalidad de confeccionar perfiles ideológicos que permitan discriminar a empresas "no afines" a la causa separatista.

Por si este grado de iniquidad no fuera suficiente, los representantes de estas asociaciones manifiestan pública e impunemente su deseo de que las administraciones se sumen a este proyecto ya que las administraciones "*también consumen*", algo que trasciende la mera acción particular al vincular a instituciones públicas que manejan el dinero de todos y por tanto están obligadas conforme a lo establecido por el artículo 103 de la Constitución Española a servir con objetividad al interés general, y que puede tener resultados

desastrosos para la economía al premiar a unas empresas por razones ideológicas en detrimento de otras más competitivas.

Las élites del “*procés*” y sus siempre éticamente reprobables métodos, están sometiendo a su control y dominio todos los ámbitos de la sociedad catalana mientras el Gobierno de la Nación mira para otro lado.

La gravedad del boicot a las empresas no explícitamente afines a su causa y tan obscenamente anunciado por la presidenta de la ANC, alcanza cotas de extrema gravedad si pensamos que esta organización separatista ya ha irrumpido en los órganos económicos tras situar a un independentista en la presidencia de la Cámara de Comercio de Barcelona, corporación de derecho público que representa los intereses de empresas y autónomos catalanes, y desde donde, además, se puede dar el salto a otras instituciones como Turismo de Barcelona, Fira de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca. Con respecto a alguna de éstas, Paluzie ha sido clara en sus sectarios objetivos: *“Tenemos que autoenfocarlas en lo que necesita el país”*.

Y para mayor gravedad y evidencia de la indefensión en la que se pueden encontrar las empresas catalanas que no quieren posicionarse políticamente, el gobierno autonómico de Cataluña lo ha apoyado implícitamente, por medio de su vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, quien al ser preguntado sobre esta acción, se negó a condenarla y se limitó a manifestar que *“no tengo nada que decir, respeto las opciones porque los consumidores son libres de elegir las empresas que consideren más adecuadas en base a diferentes criterios”*.

Tampoco se puede olvidar que este tipo de acciones de boicot contra las empresas no solo perjudican la actividad económica de la comunidad autónoma, sino que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo que dependen de las empresas que son víctimas de estas acciones.

Teniendo presente todo lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Está el Gobierno en funciones enterado de la creación, desarrollo y puesta en marcha del proyecto *“Consum Estratègic”* promovido por la asociación separatista Asamblea Nacional Catalana? De ser así, ¿qué opinión le merece el mismo?
2. ¿Tiene constancia el Gobierno en funciones de que dicha asociación separatista, cuyo ex líder, Jordi Sánchez, está siendo juzgado en estos momentos acusado de rebelión, haya

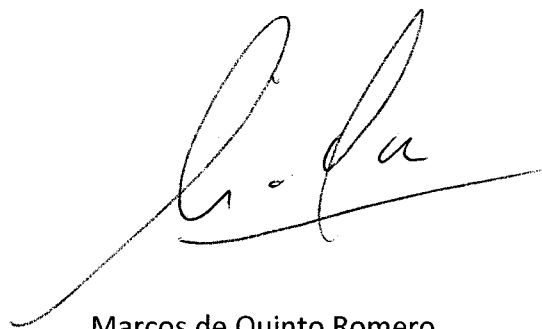
recibido en algún momento contratos, subvenciones, ayudas u otras percepciones económicas que procedan, directa o indirectamente, de fondos públicos? En caso afirmativo, ¿tiene constancia de que parte de dichas percepciones hayan sido financiadas, directa o indirectamente, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado?

3. ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno en funciones para evitar que dicho proyecto siga funcionando impunemente en detrimento y explícito menoscabo de los intereses de buena parte del tejido empresarial catalán?
4. ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno en funciones para proteger a las empresas catalanas de este tipo de acciones y dotarlas de seguridad jurídica para el desarrollo de su actividad?
5. ¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno en funciones para proteger los miles de puestos de trabajo de catalanes que dependen de estas empresas que están siendo víctimas de campañas de boicot por parte de entidades separatistas, con el apoyo implícito del Gobierno autonómico?
6. ¿Se ha reunido o tiene previsto alguna reunión el Gobierno en funciones con las principales patronales y organizaciones sindicales de Cataluña, que ya han rechazado esta acción, para conocer la situación de las empresas en esta comunidad autónoma?



Inés Arnedas García

Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos



Marcos de Quinto Romero

Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos